

Esto nos pone en situación de volver a tomar el hilo de los acontecimientos que titulamos como «El caso Schneider».

### *Un problema para EEUU*

Cuando a principios de 1964, el Pentágono norteamericano decidió poner un grado más de preocupación en sus relaciones con las Fuerzas Armadas chilenas, estaba dando el primer paso para «reparar y reacondicionar» el deteriorado último baluarte de la dominación imperialista en Chile, en caso de que las «condiciones actuales continúen mostrando una tendencia al peligro de una subversión obrera y campesina en Chile».

Para los generales norteamericanos del Comando Sur en la Zona del Canal de Panamá (que funciona con un costo de 136,5 millones de dólares al año, con 12 generales y almirantes para 10.500 hombres), encargados de «proteger y administrar» los Programas de Ayuda Militar a América Latina, el «caso de Chile», en 1964, era el caso de «problemas en potencia».

La situación política y económica del país demostraba una tendencia a un serio enfrentamiento entre los trabajadores, por un lado, y los intereses de los grandes monopolios chilenos y yanquis por otro. Era el último año del período presidencial de un representante de los monopolios chilenos (Jorge Alessandri Rodríguez, presidente de la Manufacturera de Papeles y Cartones, empresa monopólica central de un conjunto empresarial chileno-norteamericano de más de 500 millones de dólares de capital social), con claras señales de descalabro económico: más de 46 % de inflación, después de haber tenido un índice de 8 % en 1961, de 14 % en 1962 y de 45 % en 1963. La cesantía superaba el 7 %, es decir, más de 200.000 desocupados sobre un total aproximado de 2.800.000 chilenos considerados como «fuerza de trabajo». La deuda externa llegaba a 1.896 millones de dólares (de los cuales 1.629 eran créditos ya utilizados y 267 millones en créditos todavía no utilizados). La tasa de mortalidad infantil era de 102,9 por cada mil niños nacidos vivos.

Las diferencias de condiciones de vida entre las distintas clases sociales eran brutales: 1.000.000 de campesinos y obreros vivían con 380 dólares anuales de ingreso; mientras 60.000 propietarios de latifundidos, empresas monopólicas y administradores gerenciales de las mismas, gozaban de un ingreso promedio anual de 10.450 dólares.

En términos estadísticos, en 1964 la situación era, según estudios de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) creada por la Administración Frei, la siguiente:

Los obreros constituían el 50 % de la fuerza de trabajo y recibían el 21 % del ingreso total.

Los empleados sumaban el 22,8 % de la fuerza de trabajo y recibían el 27,2 % del ingreso total.

Los trabajadores por cuenta propia, eran el 21,8 % de la fuerza de trabajo y recibían el 17,6 % del ingreso total.

En cambio, los contratistas y rentistas eran sólo el 1,4 % de la fuerza de trabajo y absorbían el 26,4 % del ingreso.

El resto del ingreso (7,9 %) correspondía al Gobierno, por sus propiedades e impuestos directos.

Estas desigualdades eran mucho más graves en el campo, donde trabajaba el 25 % de la población activa chilena. Allí, el 3 % de los propietarios agrícolas considerados como latifundistas, se apropiaban del 37 % del ingreso generado en el sector; mientras el 71 % de las familias que vivían en el campo recibían sólo el 33 % del ingreso del sector.

Para mantener esta realidad, los sucesivos gobiernos radicales y conservadores, entre 1945 y 1964, habían montado un aparato represivo militarizado (el cuerpo de Carabineros) que, cuando se veía sobrepasado por la lucha de los trabajadores, era apoyado por las tres ramas de las Fuerzas Armadas, principalmente el Ejército. Sin embargo, la principal forma de «mantenimiento del orden» social era el engaño político y la supresión de las organizaciones sindicales. (Entre 1945 y 1964, la población sindicalizada chilena había disminuido en más de un veinte por ciento.)

En el engaño político, la situación se reflejaba en que la alianza de los partidos conservador y liberal (organización política pura de la oligarquía agraria, comercial y financiera), mantenía un 30 % de la fuerza electoral. El partido radical (formado por funcionarios del Estado y empresarios industriales ligados a las empresas norteamericanas del cobre, más algunos sectores latifundistas) mantenía un 20 % de esa fuerza electoral. La Democracia Cristiana, por su parte, que sólo a fines de la década del 50 comenzó a ser importante, tenía un 16 % de la fuerza electoral (era un partido desgajado, en los años 30, del partido conservador, y que, en 1964, estaba formado por la oligarquía industrial y por los técnicos de más alto nivel ligados a las empresas monopólicas tanto chilenas como norteamericanas).

